

VI

1955

El peronismo ingresaba en sus últimos meses de gobierno. Dos temas marcarían el comienzo del año: el petróleo y la campaña anticlerical. El escándalo en torno a la supuesta entrega, implícita en la política petrolera del gobierno, ha convertido a todos en furibundos antiimperialistas. Coinciden allí los viejos liberales —que se han vuelto anticolonialistas de pronto— con la izquierda y el nacionalismo en pleno. Aún la pequeña burguesía se contagia de ese fervor, al tiempo que se enrespa en defensa de la moral de las jovencitas de la UES —amenazada por la “lascivia del tirano”— y se inflama de fe ante los ataques a la Iglesia.

“El tema del petróleo acercó a toda la oposición y la fundió a sectores nacionalistas del ejército. La Iglesia amalgamó a laicos y católicos, imperialistas y antiimperialistas y los ligó en una sola ofensiva”¹.

Un rápido deterioro político irá convirtiendo la situación del gobierno en un verdadero tembladeral, donde cada intento por emerger, cada movimiento, acarreará consecuencias imprevistas y aproximará más al abismo. Con la oposición empeñada en una ofensiva a fondo, las tensiones crecían. La situación económica, en cambio, si distaba de ser brillante, había ido mejorando paulatinamente desde 1952, pico de la crisis. La inflación cedía, el salario se recuperaba lentamente, y el gobierno procuraba encarar la industria pesada y el problema energético.

Pero si las dificultades serían —en buena medida— consecuencia de los embates opositores, el que esa estrategia pudiera fructificar también expresaba cierta parálisis, cierta atonía que iba ganando los miembros del Movimiento Nacional. El peronismo haría, en cierto

momento, un esfuerzo por superar el "marasmo" y recobrar la senda inicial. Sería, sin embargo, tardío.

Al sonar su última hora, el régimen —aún disponiendo de los medios militares para resistir— se entregaría casi sin lucha, como si lo maniataran los hilos invisibles de un precoz agotamiento.

Pocos meses atrás un amplio triunfo electoral le había confirmado a Perón el apoyo de la mayoría de los argentinos. ¿Qué lo persuadió de la inutilidad de luchar? Algo de eso explica su situación personal, la soledad y la fatiga de quien, tras acaudillar durante diez años la Revolución Nacional, ya no encuentra fuerzas para seguir. A la vez, su formación de militar profesional, le haría recelar de las posibles consecuencias de un enfrentamiento cruento y prolongado. Pero una parte no pequeña, es atribuible a la misma naturaleza del régimen. Había alcanzado un límite que, para ser franqueado, exigía la profundización de la revolución, tal vez más allá de las posibilidades de las fuerzas sociales que aglutinaba. Era preciso sacudirse las trabas burocráticas y dinamizar nuevamente el proceso a través de una política de nuevas y más decisivas transformaciones.

La industria automotriz

Tal como se había buscado insistentemente con la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras, con las distintas aproximaciones a Estados Unidos —en setiembre pasado había visitado el país Henry Holland, funcionario del Departamento de Estado— comienzan a producirse las primeras radicaciones importantes de capitales en la industria. En enero del 55 se constituye la empresa Industrias Kaiser Argentina, que se dedicará a fabricar automóviles en el país, en una planta ubicada en Córdoba. Desde el año anterior, en la misma provincia, se encuentra instalada la empresa italiana FIAT, que produce también maquinaria agrícola, así como la Fhar, de Alemania.

Esta especie de apertura "desarrollista" del gobierno —que pretendía así superar deficiencias de la inversión interna— en tanto no parecía enteramente compatible con lo sostenido antes en relación con los capitales externos despertaría recelos y motivaría juicios adversos de los mismos sectores que embatían contra la política petrolera. Paradojalmente durante el gobierno de uno de los principales críticos —el dirigente radical Arturo Frondizi— se otorgarían concesiones petroleras mucho

más amplias y la industria automotor extranjera llegaría al país en gran escala.

El Congreso de la Productividad

Entre los días 21 y 31 de marzo de 1955 se desarrolla en Buenos Aires el Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social que convocan la CGT y la CGE, con los objetivos explícitos de mejorar la productividad y elevar el nivel de vida de los asalariados.

Para algunos, la convocatoria responde a la inquietud del sector empresarial —transmitida al gobierno— motivada por el aumento de las huelgas y el ausentismo laboral. El tema, en efecto, no estaría ausente en las ponencias del sector empresario y en las conclusiones del Congreso.

Pero por otra parte, el acuerdo se encuadraba en la filosofía de concertación social y económica entre los sectores laborales y empresarios, que Perón había sostenido repetidamente. Este principio de "colaboración" entre el capital y el trabajo, había hallado fundamentos bastante concretos en el mutuo beneficio que empresarios y obreros industriales obtuvieron en los primeros años del régimen, de la expansión del mercado interno. Cuando esos beneficios aparecían constreñidos por diversos motivos —que ya hemos analizado en páginas precedentes— el intento de institucionalizar el "acuerdo social" parecía responder a la necesidad de limitar las demandas sectoriales, evitando desbordes que alterarían la estabilidad económica buscada. En el fondo, subyacía la concepción del gobierno de que la revolución justicialista había terminado, de que se había alcanzado un punto de equilibrio —en cuanto a la participación en la riqueza— que era preciso mantener.

Pero en lo inmediato, el equilibrio no era fácil, y las partes expusieron sus quejas. José Gelbard —presidente de la CGE— advirtió contra el ausentismo y las presiones sindicales: "Tampoco es aceptable que, por ningún motivo, el delegado obrero toque un silbato y la fábrica se paralice... Otro factor negativo que nosotros no podemos silenciar es el del ausentismo... Terminar con los lunes de huelga..."². Por su parte, la CGT, por boca de su secretario general Eduardo Vuletich —sin dejar de manifestar su ánimo de colaboración— también haría escuchar su voz: "hacen también a la productividad quienes honradamente se han dado a la tarea de pregonar incesantemente por todos los ámbitos de la Patria de que nada serviría obtenerla si para ello fuera menester alterar, aunque sólo fuera en parte, la

legislación de amparo que hoy tienen los trabajadores argentinos... Son oportunas y necesarias estas aclaraciones por cuanto en los últimos tiempos hemos podido escuchar frases duras contra un sector obrero al que se le imputan bajos rendimientos o desinterés en el desempeño de la diaria labor que ejecuta... Se habla de ausentismo. Es, indudablemente, un mal que debemos y estamos dispuestos a combatir; pero, eso sí, cuando se comparen estadísticas actuales con las correspondientes a los años de la explotación oligárquica, se sepa diferenciar el ausentismo culpable, del socialmente justo que resulta de la aplicación de las leyes obreras justicialistas: vacaciones, jornadas legales, licencias por enfermedad, casamiento, fallecimiento de familiares, pre y posparto, etc., y las que permiten el más holgado estándar de vida que relevan de los esfuerzos inhumanos, eliminados por la justicia social de la nueva Argentina de Perón..."³.

Según se advierte —y más allá de la obscuridad que se suele atribuir a la CGT de esos años— la adhesión obrera a Perón se asentaba en razones muy concretas, que la dirigencia no perdía oportunidad de reafirmar.

El Congreso concluyó con un Acuerdo Nacional de Productividad, que incluía un compromiso recíproco de los dos sectores: "1º) Adopción de métodos conjuntos para incrementar la producción; 2º) Modernización de la empresa; 3º) Regulación de la asistencia al trabajo para combatir el ausentismo; 4º) Racional e integral utilización de la mano de obra; y 5º) Aumentos de salarios en forma directa, mediante sistemas incentivados proporcionales a la eficacia del trabajo y aumentos indirectos al adquirir las remuneraciones mayor fuerza adquisitiva por la disminución de los costos de producción..."⁴.

El contrato con la "California Argentina" y sus secuelas

En el mes de abril de 1955, toda la infernal barahunda que la oposición venía produciendo en torno a la política petrolera, alcanzaría su pico: el titular de Industria, Orlando Santos, suscribió con la empresa California Argentina de Petróleo S.A. —subsidiaria de la Standard Oil de California— un contrato que contemplaba la explotación y extracción de petróleo en una zona ubicada al sur del país.

Al conocerse el compromiso suscripto, y trascender sus términos, se alzaron agudas voces de protesta: los partidos opositores —particularmente el radicalismo—,

los sectores nacionalistas, la pequeña burguesía universitaria, se unen para repudiarlo. También hay inquietud en el Ejército y en el mismo peronismo.

Pocos días antes, refiriéndose a los convenios de inminente firma, Perón había previsto esa reacción: "Ya hemos conseguido ponernos de acuerdo con las empresas que nos van a sacar el petróleo. Lo van a sacar para nosotros, no para ellos. Y vamos a trabajar asociados con ellos en la tarea de extraerlo... Sé que ahora aquellos que entregaron el país cuando estuvieron en el gobierno, van a decir que los entregadores somos nosotros y que ellos son los libertadores"⁵.

Efectivamente, muchos se rasgaron las vestiduras ante el contrato que protocolizaba la "entrega" del patrimonio nacional. Desde las filas nacionalistas, Adolfo Silenzi de Stagni —prestigioso profesor— elevaría su voz para impugnar la política petrolera del gobierno. En una clase extraordinaria pronunciada el 26 de mayo en la Facultad de Derecho de la U.B.A. —donde se desempeñaba como titular de la Cátedra de Derecho Agrario y Minero— analizaría en forma pormenorizada el contrato, destacando uno a uno los aspectos en que resultaba lesivo para la soberanía, y conteniendo a duras penas su "patriótica indignación": "Es muy difícil guardar la serenidad y compostura de un profesor universitario cuando se lee disposiciones como las que comentamos, pero si queremos llegar hasta el final, debemos armarnos de una gran paciencia..."⁶ —diría al comentar una de las cláusulas. La conferencia sería impresa y circularía profusamente.

Desde el radicalismo se dejarían oír protestas no menos vigorosas. Particularmente Arturo Frondizi, encabezaría la cruzada antiimperialista: "La U.C.R. —dijo Frondizi en su mensaje del 27 de julio— exige el rechazo del proyectado convenio con una empresa petrolera foránea, porque ese convenio enajena una llave de nuestro política energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjerías y cruza la parte sur del territorio patrio con una ancha franja colonial, cuya sola presencia —si el convenio se sancionara— sería la marca física del vasallaje"⁷.

Nada autoriza a dudar de la sinceridad de los juicios precedentes: Silenzi era consecuente con su nacionalismo, y Frondizi con las tesis que —sobre el tema— expondría en su libro *Petróleo y Política*, aparecido por aquella época. Pero años después, el mismo Silenzi de Stagni —con cierto dejo resignado— se vería obligado a reconocer que el contrato firmado con la California era riguroso frente a las cláusulas concesivas de los convenios petroleros suscriptos por el gobierno argen-

tino en 1958, cuando el presidente era —precisamente— Arturo Frondizi: “La lucha por la defensa del petróleo nacional constituye un punto de partida de la defensa de toda la economía argentina. No obstante lo proyectado en las postrimerías del régimen peronista, no resultó sino algo pálido si se lo compara con los contratos actualmente en vigor en materia petrolera, culminación de un proceso que inició en 1955 el entonces secretario de Industria Alvaro Alsogaray”⁸.

Más allá de esta digresión —y aunque se cargaron las tintas al respecto— el contrato contenía, efectivamente, cláusulas poco compatibles con el confesado nacionalismo económico del gobierno peronista. El área concedida a la California para su explotación, tenía una extensión de 49.800 kilómetros cuadrados, ubicados en el territorio de Santa Cruz. El término del contrato alcanzaba a cuarenta años, prorrogables, y la empresa se obligaba a invertir 13 millones y medio de dólares en maquinaria y equipos, en el término de cuatro años. La extensión del área de explotación se reducía a partir del cuarto año, quedando limitada a 5.000 kilómetros cuadrados a los 20 años. Se concedía a la California libertad para girar al exterior, en dólares, el equivalente a las utilidades obtenidas en pesos en el país. Asimismo, se le otorgaba el derecho a importar —libre de gravámenes— toda la maquinaria y equipos que considerara necesarios, e igualmente, a reexportar equipos no utilizados. YPF se obligaba a proveer toda la información que poseyera sobre el área incluida en el convenio. En cuanto a las utilidades obtenidas por la empresa, serían repartidas por mitades con el gobierno argentino. El petróleo extraído se vendería al país en dólares —al precio fijado en Texas, deducido un descuento del 5 %— hasta cubrir la demanda interna, permitiéndose asimismo la exportación del remanente. El consorcio estaría facultado para rescindir el contrato por notificación escrita en cualquier momento, debiendo abonar los importes no invertidos, en tanto que si el mismo era anulado por el gobierno, deberían pagarse a manera de indemnización las sumas equivalentes a las inversiones efectuadas por la empresa, más el producido neto obtenido o a obtener por el término de duración del convenio. Finalmente, se establecía que en caso de surgir divergencias entre el gobierno y la compañía, éstas se someterían al arbitrio de una persona o firma de alta reputación internacional, designada de común acuerdo entre las partes.

En particular, resultaba irritante la última de las cláusulas mencionadas, interpretada como “extraterri-

torialidad”, por cuanto los litigios no se sometían a tribunales nacionales, sino a un árbitro “neutral”. También se consideraba que la forma de determinar el precio no sería ventajosa, y que las indemnizaciones a pagar en caso de rescindir el contrato el gobierno argentino, eran excesivas.

Todo esto era, en buena parte, cierto. No obstante, se exageró notoriamente el carácter “diabólico” del acuerdo, que —como surge de lo dicho por Silenzi de Stagni— no era más lesivo que los que firmaría la tecnocracia desarrollista pocos años después.

No era sino el contrato “tipo” que ofrece un trust internacional, cuya finalidad estaba lejos de favorecer desinteresadamente al país firmante. Sin embargo, la situación de la Argentina y la urgencia por incrementar rápidamente su infraestructura energética, la colocaban en un atolladero. Parecía no quedar otro camino que la negociación con los consorcios extranjeros, que ofertaban sus condiciones leoninas.

Pero a la vez, existía también en Estados Unidos un indisimulado interés por ampliar las fuentes de provisión de combustibles, en momentos en que el acceso de la Unión Soviética al armamento nuclear modificaba sustancialmente la situación geopolítica, al hacer peligrar los tradicionales yacimientos de Medio Oriente, que dejaban de estar amparados por los medios convencionales de guerra. No debe olvidarse que la hipótesis de una tercera guerra estaba bastante vigente por aquel momento, y concernía tanto a Estados Unidos como a la Argentina.

Entre estos dos intereses, a la vez coincidentes y opuestos, corría un estrecho desfiladero por el que podía liscuir la estrategia del gobierno argentino. “Pero para negociar en condiciones convenientes para nuestro país era necesario que Estados Unidos pusiera sus cartas sobre la mesa, y esto significaba una política de anteos, de retardos frente a la política norteamericana...”⁹, a fin de que el problema se planteara en sus reales términos: la necesidad de Estados Unidos de poner en condiciones de explotación el petróleo argentino, y no su voluntad de cooperar “desinteresadamente”.

Y existen fundadas razones para pensar que el contrato con la California no estaba destinado a efectivizarse tal como se firmó, sino que se trataba —justamente— de un tanteo, de un intento de regatear en busca de las condiciones más favorables cuando —como ocurrió— el Congreso negara su aprobación.

El contrato fue sometido a la Legislatura, donde inmediatamente se encontró con la oposición, no sólo de

los diputados radicales, sino de la propia bancada oficialista. La CGT se opuso al proyecto, y el bloque de diputados sindicales reflejó abiertamente esa postura. Amado Olmos —perteneciente a ese sector— juntamente con John William Cooke, se destacaron por su intransigencia al respecto. También fue opositora la tesitura asumida por el resto de los parlamentarios justicialistas y por el periódico oficialista *Democracia*, al igual que por la revista *De Frente*, que dirigía Cooke, y era expresión de la izquierda del peronismo.

Tiempo después, Arturo Jauretche escribía al respecto: "Todos los adversarios de Perón están contestes en que el Congreso, la CGT y ese periódico —'Democracia'— eran incondicionales obsecuentes de Perón. Ninguno duda que si éste lo hubiese exigido la ley habría sido sancionada en 24 horas... ¿Podía un Congreso cuyos miembros fueron perseguidos después por el delito de traición a la Patria por haber otorgado facultades extraordinarias al 'Dictador', obstaculizado, o simplemente retardado la sanción de una ley exigida por el mismo? No habría ningún revolucionario de 1955... que pueda explicar que la ley no se sancionase en un largo año de discusiones y sobre el tambor, si el dictador lo hubiera exigido... es evidente que el proyecto 'California' no estaba destinado a ser convertido en ley, máxime por un gobierno que en la reciente reforma constitucional de 1949 había incorporado al texto de la Constitución el artículo 40"¹⁰. Con la opinión de Jauretche coincide parcialmente el testimonio de Oscar Albrieu —ministro del Interior desde agosto de 1955— quien habría asegurado a un allegado que el proyecto de ley era deliberadamente demorado por el Congreso y Perón procuraba bloquearlo¹¹. Incluso, hay versiones según las cuales Perón mismo instruyó al bloque de diputados de origen sindical, para que se opusieran al contrato¹².

Lo cierto es que el contrato no llegó a materializarse, pero proveyó un estrepitoso argumento a los opositores. Si efectivamente, su propósito fue —según lo hemos supuesto— regatear con la California, esa estrategia no alcanzó a fructificar: no hubo tiempo para ello.

La separación de la Iglesia y el Estado

La evolución del conflicto con la Iglesia, iniciado el año anterior, se aceleraría al promediar 1955.

El 5 de mayo entra en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley firmado por diez legisladores peronistas del bloque gremial, que dispone la convocatoria

a una convención constituyente, con el fin de establecer la separación de la Iglesia y el Estado. En la exposición de fundamentos se dice: "En materia religiosa el Estado debe limitarse a garantizar imparcialmente la existencia y libre ejercicio de todas aquellas creencias que sean compatibles con nuestro nivel de civilización y con la moral pública. La concesión de alguna preeminencia o de algún privilegio no sólo quebranta el principio de libertad de culto, enfáticamente declarado por nuestra Constitución, sino que, más aún, viola el principio de la igualdad política y civil, que son la esencia misma de nuestra existencia y organización como Nación... Nuestro Movimiento Peronista es el resultado de una eclosión espiritual que nació el 17 de octubre de 1945, es el surgimiento de un ideal de libertad desconocido hasta entonces, y en consecuencia, a partir de esa fecha, a medida que ese ideal de libertad va avanzando exige la revisión de todo aquello que se oponga a esa expresión del pueblo... Por todo ello... y porque creemos firmemente interpretar la voluntad del pueblo... es que dejamos formulado el presente proyecto de reforma a la Constitución Nacional, tendiente a la separación de la Iglesia y el Estado"¹³.

A continuación, y en breve articulado, se disponía la convocatoria a la convención reformadora de la Constitución, dentro de un plazo de 180 días, a partir de la promulgación de la ley.

La ley se debatió en Diputados el 19 de mayo, y fue aprobada por 135 votos por la afirmativa, contra 12 en contra, provenientes de legisladores radicales.

El hecho de que el radicalismo —un partido laicista— votara en contra, da una idea del clima generado. Toda la oposición, desde el nacionalismo católico hasta la izquierda liberal —pasando por los radicales— estrecharía filas contra Perón, y cualquier maniobra del gobierno serviría para galvanizar esa unidad.

En las Cámaras, los legisladores radicales tuvieron que realizar verdaderas "piruetas" dialécticas para justificar su oposición: el diputado Francisco Rabanal la fundaría en el papel fundamental de la Iglesia argentina en la lucha por los derechos obreros y en que "el Cristianismo no era compatible con los principios totalitarios del régimen"¹⁴. En tanto que Carlos H. Perette explicaría la posición de su partido diciendo que no existían en el país garantías para la discusión del tema.

No obstante la "solidez" de las argumentaciones, el proyecto pasaría al Senado y se convertiría en ley sin reformas sustanciales. Sin embargo, tampoco alcanzaría a concretarse, pues en el mes de agosto, ambas Cámaras dieron sanción a un proyecto del diputado —y luego

ministro del Interior— Oscar Albrieu, por el que se prorrogaba 180 días el llamado a elecciones de constituyentes. Esto ocurriría en momentos en que Perón, consciente ya de la magnitud alcanzada por el conflicto, procuraba distender la situación con el clero y llegar a un entendimiento.

Sin embargo, era tarde para conciliar posiciones: el intento de separar la Iglesia del Estado había confirmado el carácter "sacrílego" del gobierno, y se extendía la idea de que el peronismo pretendía crear una especie de cristianismo estatal, cismático y adicto.

En secretos sótanos, algunos sacerdotes furiosamente antiperonistas, se ocupaban en infundir en las conciencias de muchos oficiales jóvenes la idea de que era preciso aniquilar al gobierno —y de ser posible al gobernante— en defensa de la fe. El gobierno —alertado de esas actividades— respondería con un recrudecimiento de la propaganda anticlerical, a la vez que denunciaba y reprimía a los sacerdotes y laicos complicados en actividades conspirativas.

Como se verá el día de Corpus, el enfrentamiento con la Iglesia movilizaría contra el régimen a los jóvenes católicos, y también a los no tan jóvenes y no tan católicos...

La procesión de Corpus Christi

A la anunciada convocatoria para reformar la Constitución se unieron, en los primeros meses de 1955, otras medidas anticlericales: el 13 de mayo, la Cámara de Diputados votó la derogación de la ley de enseñanza religiosa y moral en las escuelas, en tanto que el 20 de marzo, un decreto había reducido los feriados nacionales y días no laborables, eliminando como tales las festividades religiosas, a excepción de Navidad y Viernes Santo.

La Iglesia preparaba su respuesta, y todo hacía prever que la tradicional procesión de Corpus Christi se convertiría en una manifestación política contra el gobierno. La sospecha de que así ocurriría se convirtió en certidumbre cuando el episcopado anunció que el día de la celebración de Corpus —que era el jueves 9 de junio— se oficiaría una misa vespertina en la Catedral, trasladándose la procesión al sábado 11. "La Curia Metropolitana había hecho distribuir volantes en todas las parroquias de la ciudad"¹⁵. El gobierno decidió actuar "preventivamente", y se citó en el Ministerio del Interior a los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa, a los que se les informó "que las autoridades eclesiásti-

cas habían incurrido en un error al suponer que estaban autorizadas para realizar la procesión de Corpus Christi mañana, puesto que el permiso respectivo se les había otorgado para el mismo día de Corpus, es decir ayer. Que el cambio de fecha dispuesto de por sí por el arzobispo no podía tener trámite porque contrariaba las disposiciones legales en vigor. Asimismo se les hizo notar a los señores obispos que la realización de la procesión en una fecha distinta a la señalada en el calendario litúrgico y en violación de normas legales podría ser motivo de desórdenes que el gobierno está empeñado en evitar... Como consecuencia... no se realizará la procesión de Corpus ni actos en la vía pública en el día de mañana..."¹⁶.

Desestimando la prohibición, la Iglesia mantuvo la convocatoria para el día sábado. A nadie se le ocultaba que la manifestación se llevaría a cabo en cualquier caso, pues el público habría de desbordar la Catedral, volcándose a la Plaza de Mayo.

El día 11, hasta el mediodía, la Plaza apareció ocupada por gran cantidad de efectivos policiales. Sin embargo, estos fueron retirados luego, ante la evidencia de que su presencia resultaría inconveniente en razón del elevado número de manifestantes que se preveía, y del clima que —era de presumir— imperaría.

Efectivamente miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo. Concluida la ceremonia religiosa —y no obstante la exhortación de monseñor Tato a desconcentrar en orden— una gran parte de los concurrentes integraron una columna que marchó hacia el Congreso, a lo largo de la Avenida de Mayo, agitando pañuelos blancos. Si bien había grupos de la Acción Católica organizando la manifestación, junto a ellos se podía detectar la presencia de militantes políticos de todos los partidos opositores. Desde conservadores hasta comunistas, pasando por los radicales y socialistas, marchaban juntos contra Perón. La procesión de Corpus se había convertido en un pronunciamiento de repudio al régimen, bajo la advocación de la Iglesia, que congregaba todos los credos políticos y todos los matices ideológicos: nacionalistas clericales, liberales, izquierdistas y derechistas. Sólo faltaba, claro, la clase obrera.

Al arribar a las proximidades del Congreso, algunos grupos ascendieron por las escalinatas y treparon por los lugares accesibles. Entre fuertes consignas antiperonistas —expresadas abiertamente— y sin que la policía interviniera, la manifestación se desarrolló en forma incruenta.

Fue en esas circunstancias, cuando tuvo lugar el confuso y sonado episodio de la quema de la bandera

argentina, que el gobierno atribuyó a los manifestantes de la Acción Católica, y que —caído ya el peronismo— una comisión investigadora presidida por el capitán de navío Aldo Luis Molinari (secundado por —¡nada menos!— el célebre “capitán Gandhi”) imputaría a la policía y al ministro del Interior. En realidad, se habría tratado de un hecho bastante nimio, “inflado” por ambas partes.

Según la versión de Fermín Chávez —historiador que ha investigado el tema— algunos manifestantes desprendidos de las columnas de la Acción Católica, procuraron apagar con las astas de las banderas que portaban, las lámparas votivas que ardían en el Congreso en conmemoración de Eva Perón. En ese intento, se chamuscó una de las banderas, que fue apagada y ocultada rápidamente. Sin embargo, un agente de policía que presencié el hecho, informó a su comisaría. Al no poder hallar la bandera —y para mostrar una evidencia que pusiera de manifiesto su “celo y eficiencia”— el comisario habría fraguado la prueba: se quemó expreso una bandera, que más tarde sería exhibida con el consiguiente escándalo¹⁷.

No se habría tratado, pues, de una provocación ni de una directiva gubernamental, sino de un hecho irrelevante desde el punto de vista político. De todos modos, no ocurrió lo mismo con sus consecuencias: el gobierno procuró aprovechar lo ocurrido para presentar a los católicos como agentes de la “antipatria”. El Presidente de la Nación y el ministro del Interior exhibieron públicamente la bandera quemada, y se acusó a los manifestantes de la Acción Católica del agravio. También se le imputaron distintos atentados y hechos de violencia cometidos el día 11 de junio.

El 13 de junio, las dos Cámaras del Congreso realizan reuniones de desagravio a la bandera, en tanto que monseñor Tato, en conferencia de prensa, desmiente categóricamente todas las acusaciones de que han sido objeto los grupos católicos.

Al día siguiente, llegará la dura respuesta oficial: un decreto del Ejecutivo separa a ambos prelados —Tato y Novoa— de sus cargos. Inmediatamente después, se ordena su detención, y el día 15 de junio son conducidos en automóviles policiales al aeropuerto de Ezeiza, obligándoseles a abandonar el país, rumbo a Roma.

En tanto, el diario oficialista *Democracia*, desata una furiosa campaña contra la jerarquía eclesiástica, donde se acusa de “prestamista” al cardenal Copello y de “Papa negro de la curia, inclinado a la efebocracia...” a monseñor Daniel Figueroa, entre otras impu-

taciones de dudoso gusto¹⁸. La tensión había llegado a su punto crítico.

Los sucesos del 16 de junio

Entre fines de 1954 y principios de 1955, la actividad conspirativa se había renovado en algunos grupos de las Fuerzas Armadas. En especial en la Marina, donde el sentimiento de descontento y la oposición a Perón eran particularmente fuertes.

El gobierno recibía constantes informes acerca de esas actividades, a través del teniente coronel Osinda, pero insólitamente les restaba importancia¹⁹.

A principios de 1955, un grupo de capitanes de fragata, junto con algunos oficiales de la Fuerza Aérea, comenzaron a trazar un nuevo plan insurreccional. En su búsqueda de un oficial superior que lo encabezara, lograron el concurso del contralmirante de infantería de Marina Samuel Toranzo Calderón.

Por intermedio de uno de los complotados —el capitán Antonio Rivolta— se buscó apoyo en el Ejército, interesándose al general Lonardi. Sin embargo, éste consideró prematuro el movimiento. Se recurrió entonces al general Aramburu, que aprobó el proyecto pero se excusó, pues en razón de su cargo —director de Sanidad del Ejército— carecía de tropas a su mando. Finalmente —y por intermedio de Luis María de Pablo Pardo, militante nacionalista— Toranzo Calderón se puso al habla con el general León Bengoa, que tenía mando de tropas con asiento en Entre Ríos. Este último estuvo de acuerdo, y en un encuentro secreto celebrado en Buenos Aires, ambos jefes convinieron actuar con extrema cautela —procurando tentar a otros oficiales— y volver a reunirse más adelante.

También se buscaron apoyaturas políticas para el futuro gobierno, en caso de que la intentona triunfara. Se contactaron nacionalistas y liberales, cuya aspiración común era el derrocamiento de Perón. El futuro gobierno “revolucionario” estaría encabezado por el contralmirante Calderón, quien “gobernaría con una junta civil integrada por Miguel Angel Zavala Ortiz, radical; Adolfo Vicchi, conservador, y Américo Ghioldi, socialista”²⁰. “Gorilas” cabales, estos políticos habían participado ya de otros intentos, y habían conocido la cárcel o el exilio en distintos momentos. Zavala Ortiz pertenecía al sector “unionista” del radicalismo —la derecha partidaria, desplazada de la conducción por el sector intransigente de Frondizi— por lo que su presencia junto a los conspiradores no aseguraba el con-

curso de esa fuerza política. Tampoco hubo contactos con los sectores católicos, ni se lograron apoyaturas firmes en el Ejército, a excepción del nombrado Bengoa. "Puede inferirse que las grandes fuerzas militares y civiles que se unirían en setiembre no consideraban 'maduro' el momento" 21.

Aunque los hechos del 11 de junio influyeron en el ánimo de Toranzo Calderón, en el sentido de acelerar el trámite, el golpe aún no tenía fecha fija, pues Bengoa opinaba que debía dársele tiempo para interesar a otros generales. Sin embargo, los planes sufrieron una alteración: el jefe naval fue alertado de que el gobierno había detectado sus actividades. Según algunas versiones, el Servicio de Informaciones de la Aeronáutica habría descubierto a los complotados. Así las cosas, se decidió actuar de inmediato.

Toranzo Calderón fijó como fecha para el intento el 16 de junio. El plan contemplaba un ataque aéreo a la Casa de Gobierno, que tenía por objeto matar a Perón (aprovechando que se llevaría a cabo un desfile aeronáutico al que asistiría el Presidente). Simultáneamente, un batallón de infantería de Marina debía avanzar por tierra, atacando el edificio. Estaba prevista la participación de grupos de civiles armados, que apoyarían el ataque y actuarían en otros puntos de la ciudad, tomando diversas radios para emitir comunicados (se trataba de los "comandos civiles", que actuaban desde fines de 1954).

Al mismo tiempo, Bengoa debía levantar sus tropas en el Litoral, y se plegarían las Escuelas de Artillería y de Aviación de Córdoba, así como la base naval de Puerto Belgrano, donde la flota sería sacada al mar por oficiales rebeldes.

Toranzo Calderón estableció su cuartel general en el Ministerio de Marina, tras obtener la solidaridad de su titular, contralmirante Aníbal Olivieri, y del comandante de infantería de marina, vicealmirante Benjamín Gargiulo. Olivieri se internó el día anterior en el Hospital Naval, fingiendo ante sus pares de ejército y aeronáutica que padecía una afección cardíaca, a fin de contar con libertad de acción 22.

La intentona concluyó con un fracaso total. Nada salió como se lo había imaginado. En la noche del 15 al 16, el general Lucero fue informado de que estallaría la sublevación. Sin concederle total veracidad al informe, el ministro comunicó a Perón la noticia. Ya cerca del mediodía, se supo del levantamiento de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces Lucero se reunió nuevamente con Perón, recibiendo instrucciones de reprimir el movimiento, y aconsejando al presidente su tras-

lado al subsuelo del Ministerio de Ejército, por razones de seguridad. Así se hizo.

A las doce del mediodía, los insurrectos controlaban Ezeiza, la Escuela de Mecánica, el Arsenal de la Marina y el Ministerio de esa fuerza, donde se había establecido el comando operativo. Tropas de infantería de marina ocupaban posiciones cercanas a la Casa de Gobierno.

Hacia las 12.45, los aparatos rebeldes sobrevolaron la Plaza de Mayo e iniciaron el bombardeo de la Casa de Gobierno y el Ministerio de Ejército. La densa niebla había impedido concretar el ataque por la mañana. "Por primera vez Buenos Aires era bombardeada desde el aire. Se asistió a espectaculares picadas de los pilotos que, tras descargar las bombas, atacaban a la Casa Rosada con fuego de ametralladoras" 23.

En el interín —y aunque el general Lucero había ordenado evitar la participación de civiles 24— la CGT convocó por radio a los trabajadores a defender el gobierno, fijando como punto de concentración la sede de la central obrera, cercana a la zona del ataque. Al mismo tiempo, numerosos camiones con militantes peronistas llegaban por la Avenida de Mayo, cuando tuvo lugar el segundo ataque, a cargo de los Gloster Meteor de la aeronáutica. Con saña sin precedentes, los pilotos ametrallaron a los manifestantes y también a los transeúntes casuales. Las bombas —pocas de las cuales alcanzaron los blancos fijados— se esparcieron por la zona cobrando enorme número de víctimas civiles.

La cantidad de víctimas varía según las versiones: 300 muertos y un centenar de heridos según el informe oficial. "Algunos testimonios hablan de 1000 y hasta 2000 muertos enterrados a hurtadillas en la Chacarita" 25. En cualquier caso, esos hechos sentarían un precedente de violencia que no se olvidaría, y ayudarían a comprender el odio antipopular que movía a los rebeldes. Los "libertadores" teñían precozmente sus manos con sangre. Volverían a hacerlo más tarde...

En tanto, desde el ministerio de Ejército, Lucero —junto con otros jefes— organizaban la represión. En el curso de la tarde, la abrumadora superioridad militar de los efectivos leales, fue rindiendo una a una las posiciones de los sublevados. Bengoa no fue avisado a tiempo, y las naves de Puerto Belgrano no pudieron hacerse a la mar. Los apoyos esperados no llegaron, pues, a efectivizarse. Los ataques a la Casa de Gobierno fueron rechazados, y el Ministerio de Marina quedó rodeado por efectivos del ejército.

A las 18.15 se produjo el último ataque aéreo, y 39 aviones rebeldes huyeron a Uruguay, dejando atrás su

Bombas
16 de
Junio

estela de muerte. En uno de ellos —se asegura— viajaba Miguel Angel Zavala Ortiz, el dirigente radical que pocos años más tarde sería canciller del gobierno de Arturo Illia.

Poco después se rendía el comando insurrecto, y el vicealmirante Gargiulo se quitaba la vida de un balazo en el edificio del Ministerio de Marina.

Al caer la tarde, ya conjurada la sublevación —y mientras la policía recogía centenares de cadáveres de las víctimas del bombardeo “democrático”— Perón habló por radio desde el Ministerio de Ejército, procurando restar importancia a los hechos: “Les hablo desde nuestro puesto de comando, que, como es lógico no puede estar en la sede del gobierno, de manera que todas las acciones que se han realizado sobre la Casa de Gobierno han sido tirando sobre un lugar inerte, perjudicando solamente a algunos ciudadanos, que han muerto por efecto de las bombas. La situación está totalmente dominada. El Ministerio de Marina, donde estaba el comando revolucionario, se ha entregado, está ocupado y los culpables detenidos...”²⁶. Al mismo tiempo, el presidente hizo el elogio de los militares leales: “Deseo que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, cuyos componentes han demostrado ser verdaderos soldados, ya que ni un solo cabo ni soldado ha faltado a su deber. No hablemos ya de los oficiales y de los jefes, que se han comportado como valientes y leales”²⁷. Luego, Perón enfrentó decididamente la idea que se propagaba entre muchos peronistas, de “hacer justicia por sus propias manos”: “Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión... les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. La lucha debe ser entre soldados. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo les pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira... que no cometan ningún desmán... La ley caerá inflexiblemente sobre ellos... El pueblo no es el encargado de hacer justicia... Prefiero, señores, que sepamos cumplir como pueblo civilizado y dejar que la ley castigue”²⁸.

También el secretario adjunto de la CGT, Di Pietro, pronunciaría un discurso de tono pacificador, convocando a un paro general para el día 17, que cada uno debía cumplir en su propio domicilio, en señal de duelo.

El incendio de las Iglesias

Al caer la tarde —y casi simultáneamente con el discurso de Perón recomendando no adoptar represalias— piquetes organizados se dirigen a la Curia Metropolitana y proceden a incendiar el edificio, tras rociarlos con nafta. También se llevaron a cabo actos depredatorios en la Catedral, y parecidas acciones realizaron otros grupos en las Iglesias de San Ignacio, Santo Domingo, San Miguel, La Merced, San Nicolás, La Piedad y Nuestra Señora del Socorro.

Ante la inactividad de los bomberos y la policía, los templos arden y las llamas iluminan lúgubramente la noche. Los altares y las imágenes están destruidos y —como dos años atrás— el humo del incendio ocultará a los ojos de muchos, los cadáveres de las víctimas de la furia oligárquica. “Porque el peronismo quema los íconos, pero la oligarquía mata a los hombres”²⁹.

De todas maneras, fue una respuesta irracional e impolítica. Porque sin duda, no se trató de una acción espontánea de peronistas exaltados. Una investigación ordenada por Perón a instancias del ejército, detectó la existencia de tres grupos de incendiarios: “el equipo principal constituido por 65 fanáticos que salieron del edificio central del Partido Peronista (rama masculina) y se dirigieron a la Curia para comenzar la serie de incendios, cuya responsabilidad fue atribuida al vicepresidente Alberto Tesaire; el segundo grupo, organizado en el ministerio de Salud Pública, que sacó de allí los implementos necesarios para ir a incendiar las iglesias de Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio y Nuestra Señora de la Merced; el tercer piquete, proveniente de un servicio de informaciones, preparado para prender fuego a San Nicolás y Nuestra Señora del Socorro”³⁰.

A partir de esos hechos, sobre los que Perón deslindó toda responsabilidad personal, el régimen vio aún más erosionado su apoyo. Causaron hondo disgusto, incluso entre los militares leales, y terminaron de convencer a muchos reticentes, de la necesidad de terminar con Perón. Aún fracasado su primer intento, la “libertadora” estaba en marcha...

El clima del golpe

A partir del 16 de junio, comienza para el peronismo la cuenta regresiva que conduce a setiembre. El clima político es adverso. La ruptura con la Iglesia es total.

En esos días, muchos antiguos adictos pasan de bando, sobre todo entre los militares.

Corren rumores sobre la formación de milicias obreras y algunos temen que lo ocurrido en las iglesias se reproduzca en el Barrio Norte. Se habla con fantasiosa inquietud de delaciones y espionajes por parte de los porteros y el personal de servicio... En Callao, en Santa Fe, en Recoleta y Palermo Chico —los barrios de la oligarquía y la alta burguesía— hay brigadas de jóvenes armados, que se disponen a defender sus propiedades de la “furia de la chusma”... La pequeña burguesía histerizada se pliega a esos temores, y desea fervientemente que alguien la libere de la pesadilla.

Por lo demás, desde fines de 1954 actuaban los “comandos civiles”, integrados por hombres jóvenes —en general provenientes de las clases altas— que se armaban y organizaban secretamente para actuar como apoyo de las fuerzas militares cuando éstas salieran a derrocar al gobierno. Llegarían a contar con unos 3.000 integrantes.

Por ese momento, en todo el país se llevaban a cabo reuniones políticas contra el gobierno, y cada grupo proyectaba su propia revolución. Especialmente intensas eran las actividades de los grupos políticos e intelectuales nacionalistas, que contactaban militares y proyectaban sustituir a Perón por un régimen despojado de los rasgos plebeyos y populares del peronismo, que tanto disgusto causaban.

Aun muchos ex militantes del campo popular ahora dudaban. Raúl Scalabrini Ortiz relataría cómo fue invitado a una reunión de nacionalistas y ex forjistas, donde los presentes insistían en la necesidad de desplazar a Perón para instalar un gobierno “verdaderamente nacionalista”. Algunos ya conspiraban con Lonardi y Bengoa. Scalabrini les dirá con clarividencia: “Si hay golpe, será necesariamente antipopular o antinacional, y si no lo es derivará inmediatamente en eso”³¹. Meses antes, Arturo Jauretche ha vertido análoga opinión en una reunión similar. No se equivocaban...

A la búsqueda de la conciliación

Perón advierte que sus márgenes se estrechan y que los soportes de su gobierno están agrietados. Ha querido restarle importancia al intento golpista, pero sabe que éste ha fallado por errores de organización, y porque muchos no estaban aún decididos. No puede ignorar que no basta con eliminar a las cabezas visibles, para desmantelar los mecanismos de la conspiración. Sin

embargo, no se decide a operar a fondo sobre los núcleos rebeldes. Es cierto que, a esa altura, el frente militar no podía absorber el cimbronazo de una medida “ejemplarizadora”, pues su apoyo al gobierno es condicional. Sólo la movilización obrera le puede dar la fuerza necesaria para actuar sin ataduras. Pero Perón es un hombre de orden, un militar que prefiere el sostén de sus pares y no una movilización popular de imprevisibles consecuencias. Por eso, procederá una vez más en forma condescendiente con los rebeldes, que serán condenados a prisión. Al mismo tiempo procurará desalentar las represalias de sus partidarios y buscar el acercamiento con la oposición. Pero será inútil, porque quienes presienten cercana la posibilidad de librarse de un régimen que soportan hace casi una década, no querrán desperdiciar la oportunidad. Todo gesto del gobierno será interpretado —no sin razón— como una debilidad.

El 18 de junio, Perón comenzará sus intentos de recomponer las relaciones con la Iglesia: en un discurso pronunciado en la CGT, señalará que la separación de la Iglesia y el Estado no ha sido promovida por el Poder Ejecutivo, que es un simple árbitro en la cuestión. Esta —dice— deberá ser resuelta por la Convención Constituyente convocada al efecto. La convocatoria será deliberadamente dilatada hasta que —como hemos dicho— una ley determinará su aplazamiento.

Cambios en el gobierno

Tras la asonada del 16 de junio, Perón ha quedado “preso” del ejército. Los militares leales lo han sostenido, pero pueden imponer sus condiciones. Incluso, circularán rumores de que el presidente será reemplazado por el general Lucero, y de que un consejo militar suplantaré al gabinete ministerial.

El 22 de junio, todas las unidades militares que habían sido movilizadas regresan a sus cuarteles, y son repatriados los aviones utilizados por los rebeldes para fugar al Uruguay. El 23, todos los ministros y secretarios de Estado presentarán sus renunciaciones, a fin de favorecer la reorganización del gabinete. Se advierte que el gobierno debe arrojar algún “lastre”, despojándose de ciertas figuras irritativas, o incluso cuestionadas por el ejército.

El principal “fusible” fue el ministro del Interior, Angel Borlenghi, que había acompañado a Perón durante más de nueve años. Blanco frecuente de las acusaciones de la oposición, su renuncia podía ser inter-

pretada como un gesto de "buena voluntad" del gobierno. Otra renuncia importante será la del titular de Educación, Méndez San Martín, cuya cabeza era exigida por católicos y militares. También abandonan sus cargos Juan Maggi (Transportes) y Carlos Hoggan (Agricultura y Ganadería), y el Secretario de Prensa y Difusión Raúl Alejandro Apold. En reemplazo de Borlenghi será designado Oscar Albrieu, diputado desde 1946, presidente de su bloque y de la comisión de asuntos constitucionales. Prestigioso y capaz, podía considerarse el hombre adecuado para el momento. Francisco Anglada sería ministro de Educación, Alberto Iturbe de Transportes y José Castiglione de Agricultura y Ganadería. En la secretaría de Prensa se nombraría un periodista profesional, León Bouché, distante de la desgastada e irritante imagen de Apold.

También en la CGT, sería desplazado el secretario general Juan Vuletich —muy enfrentado con la Iglesia— quedando en su lugar el adjunto, Hugo Di Pietro. (En realidad, se formalizaba un reemplazo de hecho, ya consumado semanas atrás.)

Poco tiempo después —el 26 de agosto— renunciaría el canciller Jerónimo Remorino, desgastado por los problemas con el Vaticano, para ser sustituido por Ildelfonso Cavagna Martínez.

No quedarían allí los cambios, pues además de recomponer la imagen del poder, Perón procuraría promover la dinamización de su burocratizado partido, en busca de apoyaturas capaces de compensar el avance militar y el creciente deterioro. Alejandro Leloir reemplaza a Tesaire al frente del Consejo Superior Peronista, en tanto que John William Cooke es designado interventor del partido en la Capital.

Al dejar la conducción partidaria en manos de estos hombres, Perón está intentando —ahora sí— dar batalla en el terreno político y reorientar su estrategia. Detrás de Leloir se mueven algunos de los más lúcidos hombres de FORJA —como Arturo Jauretche y Capelli— que fueran desplazados en la Provincia de Buenos Aires con la caída de Mercante. Cooke —director de la revista *De Frente*— es un diputado que representa el ala izquierda del movimiento. Se trata de los hombres más valiosos del peronismo, desde el punto de vista ideológico. Pero ese imprescindible "golpe de timón" llegará demasiado tarde para la vacilante Revolución Nacional, cuya suerte está echada.

El llamado a la tregua política

El 5 de julio, Perón retornó al despacho presidencial —que había abandonado con motivo del bombardeo del 16 de junio— y desde allí, pronunció un mensaje al país que se difundió por radio. En ese discurso, manifestó su deseo de encontrar un modo de convivencia con la oposición, a la que eximió de toda responsabilidad en el reciente intento golpista: "Tengo la convicción de que ésta ha sido una sedición militar ejecutada por algunas unidades de la marina, con la intención de asesinar al comandante en jefe de las fuerzas armadas... A través de mis largos años de lucha he aprendido a apreciar y juzgar ecuánimemente a nuestros enemigos, y deseo reconocer lealmente que considero que los partidos populares no son capaces de aceptar que se tire criminalmente sobre el pueblo indefenso... Peronistas y opositores tienen algo en común. Pongámonos de acuerdo para servir a la Patria, aunque en las demás cosas disintamos... Somos ya demasiados los peronistas para que pretendamos convencer a nuestros adversarios..." —concluyó el presidente³².

Era, a pesar de la observación final, un llamado a la tregua política, destinado a frenar las conspiraciones y dar al gobierno oportunidad de hacer pie en el resbaladizo terreno que transitaba. Aunque Perón eximía de culpas a los partidos opositores, no ignoraba que mantenían contactos con militares golpistas. Y sí era cierto que los peronistas eran muchos, también lo era que no podrían convencer a sus adversarios.

Al día siguiente, Albrieu —ministro del Interior—, diría que el presidente había tendido su mano, y restaba esperar que cada argentino concurriera a asiría porque la "...función de apaciguamiento no puede ser exclusivamente un acto de gobierno, sino que en ella deben concordar las voluntades de todos"³³.

Efectivamente, el apaciguamiento no era tarea sencilla: el 13 de julio la Iglesia salió al cruce con una pastoral, en la que se historiaban todos y cada uno de los episodios del conflicto con el gobierno, y concluía denunciando la supuesta intención de impulsar un "cristianismo auténtico" patrocinado por el Estado. Directamente, se acusaba al gobierno de propugnar tendencias cismáticas.

Perón absorbió el golpe, y el 15 de julio reunió a los legisladores en el Salón Blanco, para insistir en la "pacificación". Reconoció entonces que el peronismo había limitado las libertades en la medida necesaria para alcanzar sus objetivos, aunque sin instaurar el terror:

"A nosotros nos han matado mucha gente, pero nosotros no hemos muerto a nadie. Eso debe tenerlo bien claro la ciudadanía argentina"³⁴. Luego afirmó: "La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución. ¿Qué implica eso para mí? La respuesta es muy simple, señores: dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios. Mi situación ha cambiado absolutamente, y, al ser así, yo debo resolver todas las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procedimientos de nuestros adversarios, impuestos por la necesidad de cumplir los objetivos, para dejarlos actuar libremente dentro de la ley, con todas las garantías, derechos y libertades"³⁵. Al mismo tiempo, renunció a la presidencia del partido, como testimonio de su deseo de ser "el presidente de todos los argentinos".

El gesto de debilidad era evidente, y la opinión lo interpretaría así. Perón decía que la revolución había concluido, cuando la única forma de preservarla era continuarla... El peronismo estaba a la defensiva.

En tanto, se multiplicaban los actos y declaraciones opositoras, y el rumor de un nuevo golpe crecía. No era sólo el rumor: la conspiración estaba en marcha.

Para colmo, en esos días otro episodio vino a agravar el clima imperante: el militante comunista Juan Ingalinella —detenido por la policía rosarina— fue torturado y asesinado. El hecho alcanzó gran resonancia, y el gobierno ordenó el arresto y procesamiento de los implicados, sin poder eludir su parte de responsabilidad en lo sucedido.

Las radios a la oposición política

En los últimos días del mes de julio, y en consonancia con lo prometido, el gobierno concedió espacios radiales a los partidos opositores.

El primero en solicitar y utilizar ese medio de expresión fue el líder de la intransigencia radical, Arturo Frondizi, que habló el 27 de julio a las nueve de la noche. El discurso del presidente del principal partido opositor despertó viva expectativa, pues hacía casi diez años que los adversarios del gobierno no hablaban por radio.

"El drama de los intransigentes era el siguiente: apoyaban al golpe, pues electoralmente no podían de-

rrotar al peronismo, pero al mismo tiempo necesitaban mantener cierta distancia con sus ejecutores. Pues sabían que necesitarían por lo menos una parte del peronismo para poder ganar las elecciones, conquistar el poder político y llevar su programa a la práctica. La intransigencia resolvió esta contradicción conspirando silenciosamente al tiempo que públicamente enfrentaba al peronismo con un programa más radicalizado que el realizado por el justicialismo. Atada al carro golpista por necesidad histórica, pretendía al mismo tiempo ser la continuidad superadora de la historia argentina, retomando en un plano superior el pasado yrigoyenista y las medidas progresistas del peronismo"³⁶. Por eso, Frondizi asumiría la ofensiva política, exigiendo condiciones mínimas y desplegando los lineamientos de su partido. "No entraré al examen de las causas determinantes del drama nacional. Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio, ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes líneas en torno a las cuales será posible el reencuentro de los argentinos" —comenzó³⁷—. Luego, no dejó de mencionar los aspectos que eran lugar común de la crítica opositora: la falta de libertad, la corrupción administrativa, el adoctrinamiento político en las escuelas. Exigió el "retorno a la constitución" —supuestamente a la de 1853— y la anulación del "proyectado convenio con una empresa petrolera foránea, que enajena una llave de nuestra política energética"³⁸. Delineó un amplio programa político y económico que incluía la reforma agraria, la industrialización y el freno a la penetración imperialista, dejando entrever que el mismo debía ser aplicado por un gobierno que fuera expresión de los grandes sectores sociales integrantes de la Nación, que no era el régimen vigente. El radicalismo no aceptaba participaciones en gobiernos, dijo, y sobre el final aludió a las fuerzas armadas: "Las fuerzas armadas, creadas, sostenidas e integradas por el pueblo argentino para la defensa de la soberanía y la Constitución Nacional, no deben intervenir en política, pero tampoco deben amparar a los regímenes que supriman las libertades o atenten contra la soberanía del país"³⁹. Era una veñada mención al papel que habían de cumplir en la eliminación del peronismo.

El 3 de agosto, el presidente del Consejo Superior Peronista, Alejandro Leloir, respondió también por radio a Frondizi. "Leloir analizó uno por uno los puntos del discurso de Frondizi y respondió a sus críticas, recordándole los errores del radicalismo en el poder. 'La historia política del país —dijo después— abunda en

ejemplos de violaciones a la Constitución y a las leyes, en que incurrieron todos los gobiernos. Este es el primero que reconoce públicamente esas desviaciones constitucionales y expone las claras razones que las justificaron. Y el radicalismo deberá saber mejor que nadie la necesidad que tuvimos para actuar de esa manera" 40.

El 9 de agosto, habló por radio el presidente provisional del partido demócrata, Vicente Solano Lima, que centró su alocución en las fuerzas armadas y la Iglesia, factores que su partido estimaba fundamentales para acabar con el peronismo. El 22 de agosto, hablaría el dirigente demócrata progresista Luciano Molinas, para ocuparse de los "problemas económicos y agropecuarios" y solicitar el "renunciamento" de Perón. John William Cooke, interventor del partido peronista en la Capital, fue el encargado de responder a Molinas el 28 de agosto, defendiendo la política de su partido en los puntos atacados.

Los resultados de la conciliación. El fin de la "tregua"

La apertura hacia la oposición —desaprobada por muchos peronistas "duros"— no había logrado sus objetivos. "Hasta entonces, la táctica central del gobierno consistía en atraer a la oposición a un acuerdo, neutralizar a los golpistas en las Fuerzas Armadas y apoyarse para ello en la masa peronista... Y los hechos que se habían ido produciendo a partir del discurso de Frondizi indicaban claramente que los partidos opositores habían apostado al golpe, que los comandos civiles paramilitares seguían operando y que la acción golpista continuaba, llegando sugestivos ofrecimientos hasta el mismo general Lucero" 41.

Se había sabido de una carta del nacionalista Mario Amadeo al general José Embrioni, reclamándole una reacción militar que "salvara a la Argentina de manos de Perón", y el 15 de agosto el gobierno denunciaba el descubrimiento de un nuevo complot para asesinar al presidente. Las actividades de los grupos paramilitares autodenominados "comandos civiles" recrudecían, siendo frecuentes los tiroteos nocturnos a puestos policiales. Se sucedían los "actos relámpago" con distribución de panfletos contra el oficialismo.

Además, entre los últimos días de julio y primeros de agosto, *La Nación* publicó una gran cantidad de declaraciones que reclamaban la vigencia de la Constitución,

y se referían al gobierno como una "dictadura"; los Colegios Médicos, la Confederación de Maestros, el Congreso Argentino de la Cultura, la Federación Americana de Estudiantes, la Federación de Entidades Judías, la SADE, la Federación de Colegios de Abogados, entre otras. ¡Todas las "fuerzas vivas", la Argentina "cultiva" arremetía contra Perón...! 42.

También otros partidos que —como el socialismo— no habían tenido acceso a la radio, exigían la renuncia del Presidente (en un discurso de Alfredo Palacios, que fue grabado y no se propaló, pues aparentemente fue censurado por la dureza de sus términos).

Sin posibilidad de lograr conciliación, sólo parecía quedar al peronismo el recurso de la movilización, que revirtiera la imagen de debilidad ofrecida. John William Cooke, el 15 de agosto, había dicho: "Con referencia a la lucha política deseo informarles que el partido peronista saldrá a la calle. El 16 de junio nos tiraron bombas y nos mataron compañeros de lucha. Hasta ahora hemos pedido a nuestra gente que no haga nada. Pero a partir de este momento vamos a actuar... Saldremos de nuevo a la calle; organizaremos actos públicos en los que explicaremos cuál es la posición del partido frente a la hora actual... A nuestro partido no le gana la calle nadie. Solamente la hemos cedido porque así nos la pidió el Presidente. Si el Presidente nos dice sólo media palabra, no solamente saldríamos a la calle a cumplir con nuestras misiones específicas sino que también lo haríamos para reprimir toda vil violencia que pueda provocarse... La política de la tiza y el carbón. Con ella demostraremos al Presidente nuestra lealtad... demostraremos también a los adversarios y enemigos que nuestra tarea está basada en la auténtica voluntad del pueblo, cuya mayoría nos apoya incondicionalmente" 43.

Finalmente —el 17 de agosto—, el ministro del Interior Oscar Albrieu, habló a los periodistas en la Casa de Gobierno, para dar por concluido el imposible "idilio" con los adversarios: comenzó refiriéndose a la tregua convocada por Perón, y a su esfuerzo para que fuera respetada por todos los justicialistas. Sin embargo, la respuesta de los opositores había sido un incremento de la actividad sediciosa: "¿Cuál ha sido en general la respuesta de los núcleos de oposición? La conocemos todos; en principio, no aceptó la tregua y siguieron realizando su campaña en muchos de sus núcleos y de sus oradores o en abierta hostilidad cuando no acuciado a la revuelta o a la sublevación" 44. Se refirió también en términos duros a los que usaban del rumor y

la calumnia con ánimo de instigar desórdenes, a los sacerdotes que —en sus sermones— incitaban a la “desobediencia civil, y —especialmente— a los “comandos civiles” que desarrollaban actividades terroristas. Finalizó el ministro diciendo que el gobierno había “tomado cartas en el asunto” y estaba dispuesto a repeler con contundencia toda alteración del orden público. “Ya se previó —afirmó— que existirían núcleos que sobre los intereses del país colocarían sus pasiones o sus intereses... Es el mismo conglomerado social de 1945 y 1946 —identificó certeramente— al que el gobierno venció en las elecciones del 24 de febrero... No es posible que 200 ó 300 familias de Buenos Aires puedan mantener en efervescencia y en espíritu de rebeldía, perturbando a 19 millones de habitantes que quieren vivir en paz y en un ambiente de seguridad”⁴⁵.

De inmediato, el radicalismo deslindó responsabilidad en las conspiraciones, aun cuando algunos de sus hombres —como Carlos Perette, el nombrado Zavala Ortiz y otros— aparecerían luego vinculados al golpe de setiembre.

Para colmo, el peronismo sufría la presión interna de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo nacionalista de derecha combativo, que se había opuesto a la pacificación, y del que el movimiento procuraría desembarazarse a fin de quitarse el estigma fascista endilgado por los liberales.

El último discurso de Perón y la renuncia de agosto

Frente a una situación en extremo comprometida, al peronismo le quedaba un recurso que le era privativo: apelar a la movilización popular para sustentar al gobierno. No era tarea fácil: la paulatina degradación burocrática del partido había conspirado contra la actitud militante de las masas. “En 1946, cada peronista se sentía un conductor de la historia y responsable de la tarea común; en 1955 era ya un espectador, un aburrido miembro del coro de aplaudidores que concurría a los actos públicos, no con la pasión del combatiente, sino con una mera preocupación ritualista. Perón mismo lo había comprendido, y su renuncia del mes de agosto obedeció a esa comprensión. La gente creyó que era una comedia más, pero él en el círculo íntimo había explicado el sentido de la misma: ‘Creo que somos mayoría, pero tenemos enfrente una minoría combativa y decidida; si mi renuncia no provoca la reacción de los pero-

Isabel Anagn

nistas y los lleva a una actitud paralela, me iré de la presidencia”⁴⁶.

Por eso, el 31 de agosto, Perón buscó jugar una carta difícil. Por la mañana llegó a las redacciones de los diarios *La Prensa* y *Democracia* la copia de una carta dirigida por el Presidente a la CGT y a las dos ramas del partido, en la cual ofrecía su retiro. Argumentaba en ella, que consideraba cumplida su misión pues legaba un país económicamente independiente y con reformas sociales irreversibles; que pese a sus esfuerzos por pacificar la Nación, sólo había recibido presiones para obtener su renuncia. En vista de ello, estimaba necesario su retiro como prenda de paz. Reafirmaba luego su confianza en el Ejército, y en la convocatoria a elecciones libres, donde el peronismo volvería a triunfar.

La carta produjo el impacto esperado: para las bases peronistas, para la clase obrera, era inadmisibile el retiro de Perón por la presión de “oligarcas” y “niños bien” que se aliaban con curas y marinos. Si Perón se iba, inevitablemente volvería a gobernar la oligarquía. Así de simple lo entendían, y así sería, aunque muchos —nacionalistas, radicales, socialistas— alentaran ilusiones distintas.

Pero además, la CGT convocaba a Plaza de Mayo, donde los peronistas estaban dispuestos a aventar con sus presencias, todos los fantasmas que amenazaban al gobierno y a Perón.

Desde la mañana, como tantas otras veces, la muchedumbre comenzó a ocupar la Plaza. Un paro total silenciaba el país. Por la tarde, el balcón ya tradicional comenzó a poblarse mientras arreciaban las consignas solicitando la permanencia de Perón. El mismo sentido tuvieron los primeros discursos oficiales de la jornada.

John William Cooke alzó su voz para denunciar con clarividencia: “Esas fuerzas no están alzadas contra un hombre; lo están contra el pueblo, al que niegan el derecho de elegir su propio destino y su propio conductor. Reniegan de la Argentina nueva, la de las conquistas sociales, económicas y políticas, la de los principios de justicia y de la soberanía inmaculada, para intentar retrotraernos a la vieja factoría colonial de los estancieros explotadores, de los comerciantes ávidos, de los acaparadores habilidosos, de las ganancias supercapitalizadas, de los salarios de infraconsumo, de los gerentes extranjeros y los traidores nativos”⁴⁷. Luego, y con la presencia en el balcón de las más destacadas figuras del partido y el gobierno, habló Hugo Di Pietro, solicitando a Perón que retirara la nota.

A las 18 horas llegó Perón, recibido por una ovación que se prolongó varios minutos. En seguida, comenzó —con voz firme— la última arenga de su gobierno. Probablemente, llegó en un estado de ánimo muy especial, sabedor de que estaba ante una instancia decisiva y exasperado por el fracaso de sus anteriores intentos. A eso se refirió inicialmente: “Hace poco tiempo esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Doscientos inocentes han pagado con su vida la satisfacción de esa infamia. Todavía nuestra inmensa paciencia y nuestra extraordinaria tolerancia, hicieron que no solamente silenciáramos tan tremenda afrenta al pueblo, y a la nacionalidad, sino que nos mordiéramos y tomáramos una actitud pacífica y tranquila frente a esa infamia... Después de producidos estos hechos, hemos ofrecido a los propios victimarios nuestra mano y nuestra paz. Hemos ofrecido una posibilidad de que esos hombres criminales y todo, se reconcilien con su propia conciencia. ¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses en una tregua que ellos han roto con actos violentos, aunque esporádicos e inoperantes. Pero ello demuestra su voluntad criminal... La contestación para nosotros es bien clara: no quieren la pacificación que les hemos ofrecido. De esto surge una conclusión bien clara: quedan solamente dos caminos: para el gobierno, una represión ajustada a los procedimientos subversivos, y para el pueblo, una acción y una lucha que condigan con la violencia a que quieren llevarlo”⁴⁸. Poco a poco, las palabras de Perón encendían el clima. La multitud rugía: “¡La vida por Perón!”, realimentando una temperatura política que escalaba rápidamente.

Si Perón pensó dar a su discurso un tono de deliberada dureza, todo indica que el clima por él mismo creado obró sobre su ánimo, llevándolo a extremos no previstos: “Por eso, yo contesto a esta presencia popular con las mismas palabras del 45: a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya, establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la Ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiran o inciten... Hemos de restablecer la tranquilidad, entre el gobierno, sus instituciones y el pueblo, por la acción del gobierno, de las instituciones y del pueblo mismo. La consigna para

todo peronista, esté instalado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. ¡Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos!”⁴⁹. Sobre el final de su discurso, Perón remarcó la necesidad de defender las conquistas populares a cualquier precio y anunció el retiro de la nota elevada al partido y a la CGT. La pacificación —anunció— se alcanzaría “persuadiendo y si no, a palos...”. Y terminó advirtiendo: “Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. ¡Si no lo hacen, pobres de ellos!”⁵⁰.

Ese discurso —el más violento de cuantos pronunció— tuvo la virtud de atemorizar aún más a la pequeña burguesía y acelerar los planes adversarios: había que acabar con Perón antes que decidiera, realmente, armar contingentes obreros; antes de que fuera demasiado tarde. En realidad, no se trataba sino de una amenaza, que Perón —muy probablemente— no estaba dispuesto a cumplir.

¿Milicias obreras?

El 17 de setiembre, el secretario y el consejo directivo de la CGT, dirigieron una nota al ministro de Ejército en la que se ofrecía “poner a disposición del ejército las reservas voluntarias de trabajadores a fin de impedir en el futuro cualquier intento de retrotraer a los trabajadores a las ignominiosas épocas anteriores al justicialismo”⁵¹. La nota, firmada por Di Pietro —aunque redactada en un lenguaje algo ambiguo—, implicaba el ofrecimiento concreto de armar trabajadores.

Dos días después, el Ejército contestó a través del general Lucero a la central obrera. La respuesta —que dejaba traslucir alguna incomodidad— agradecía la iniciativa y destacaba que el reclutamiento de reservistas estaba previsto en la Constitución, no estimándose necesario por el momento.

El tema se hizo público, y sin duda produjo vivo esbozo entre los militares, que tomaron muy en serio esa posibilidad. Al punto, que contribuyó a acelerar los preparativos golpistas, según lo revelaría Marta Lonardi en un libro posterior⁵². También tuvo repercusión en las bases obreras, y no fueron pocos los trabajadores que se acercaron a las unidades básicas a la espera de armas e instrucciones.

Sin embargo, resulta dudoso que existiera en el gobierno la intención real de concretarlo. Fue manifiesto —al menos— el rechazo de los militares leales. Lucero aseguraría más tarde: “Nunca entregamos armas y

jamás hubiéramos permitido armar milicianos..."⁵³. Perón, tiempo después, afirmó que en un momento dado propuso a sus ministros movilizar parte del pueblo, sin hallar acogida favorable⁵⁴, y en una carta a John William Cooke, llegaría a culpar al mismo Lucero y a Sosa Molina de haberse negado terminantemente a que se entregaran armas a los obreros⁵⁵. Es posible que la idea haya rondado a Perón, pero es difícil creer que en algún momento estuviera determinado a ponerla en práctica. La guerra civil —como lo demostrarían los hechos posteriores— siempre le había parecido un precio excesivo para prolongar su estadía en el poder, y su voluntad de lucha —a esa altura— flaqueaba.

El alzamiento militar y la indefensión del régimen

Escaparía a los límites de este trabajo historiar detalladamente la preparación y evolución de la conspiración que condujo al golpe del 16 de setiembre de 1955. Sólo procuraremos relatar sucintamente la secuencia de los hechos principales y los lineamientos más salientes.

En realidad, la conspiración se enlazaba con episodios anteriores, y venía de lejos. Las líneas tendidas eran varias: el general Lonardi —pasado a retiro en 1952— conspiraba con apoyo de nacionalistas católicos, tratando de reconstruir el movimiento que en 1951 desbaratará el apresuramiento de Menéndez. Por su parte, el general Pedro Eugenio Aramburu encabezaba otro centro —que había avanzado más en sus planes— con la complicidad de los coroneles Osorio Arana, Señorans y Guevara. Había también otros grupos con relativa autonomía: en la Marina, los capitanes Arturo Rial, Jorge Ricardo Palma y Aldo Molinari habían reiniciado la preparación de una sublevación el mismo 17 de junio; el general Videla Balaguer —peronista hasta poco tiempo atrás— había intentado sublevar su guarnición en Río Cuarto a principios del mes de setiembre y se hallaba prófugo; otros generales como Lagos y Bengoa urdían sus propios planes.

A mediados de agosto, Osorio Arana actuó como puente entre Aramburu y Lonardi, e invitó a éste a sumarse a los planes del primero con una misión específica: encabezar el movimiento en Córdoba, sublevando las guarniciones de la provincia con el apoyo del mismo Osorio Arana y oficiales jóvenes.

Aparentemente, la frustrada intentona de Videla Balaguer —que se negó a subordinarse a Aramburu y debió huir— puso sobre alerta a los organismos de

seguridad. La iniciación de una investigación persuadió a Aramburu de la conveniencia de suspender toda acción y postergar sin fecha el alzamiento, lo que fue rápidamente comunicado a Lonardi. Indignado ante la defección del jefe del movimiento, y convencido de que se trataba de la última oportunidad, pues era inminente el descubrimiento de la conspiración, Lonardi decidió ponerse al frente, obteniendo la solidaridad de Osorio Arana.

La decisión de Aramburu de postergar todo intento, al menos hasta el año siguiente, había frenado los planes de la Marina, pues en los primeros días de setiembre, Palma, Rial y Molinari aguardaban algún apoyo del Ejército para sublevarse. Rápidamente, Lonardi y su gente —que no tenían contacto con los jefes navales— buscaron apoyos en guarniciones del interior —en San Luis, Santa Fe y especialmente en Córdoba— logrando el concurso de algunos oficiales jóvenes. En la ciudad de Córdoba existían también grupos de civiles armados, dispuestos a brindar colaboración.

El 11 de setiembre, Lonardi ultimaba los detalles de su plan. Se proponía sublevar las guarniciones de Córdoba, Cuyo, el Litoral y Neuquén. Simultáneamente debían levantarse las bases navales de Río Santiago, Punta Indio y Espora, y las flotas de mar y de río, así como las bases aéreas de Paraná, Córdoba y Mercedes (San Luis). Las tropas de Córdoba deberían converger sobre Santa Fe, y juntamente con las fuerzas rebeldes del Litoral y Cuyo marcharían sobre Buenos Aires. Simultáneamente, las unidades de la Marina de Guerra establecerían el bloqueo del puerto y —previa intimación— procederían al bombardeo de la ciudad. Como fecha tope para el estallido, se fijaba el 16 de setiembre.

El proyecto era aventurado: los apoyos de Lonardi eran inseguros, y carecía de tiempo para coordinar con la Marina su estrategia. Además de los cabos sueltos, no contaba con estimaciones precisas de las fuerzas que permanecerían leales. Era, sin embargo, un hombre decidido y seguro de la justicia de su causa. En esa medida, era honesto, y estaba convencido de que un baño de sangre era imprescindible para librar a la Argentina de las "garras" de Perón. De convicciones católicas, y próximo al nacionalismo —con el que se identificaban la mayoría de sus colaboradores cercanos— al par que honesto era —políticamente— un veterano ingenuo. Pensaba que, eliminados Perón y su régimen, podría establecerse un sistema democrático —en cuanto esto no significara el resurgimiento del "cáncer" peronista—, respetuoso de la libertad y las le-

yes, que habría de extirpar la corrupción y el desorden, sin persecuciones políticas ni ideológicas. Quedarían a salvo las conquistas obreras, se aplicaría una política de "unidad nacional" y se marcharía hacia la institucionalización a la brevedad posible. No habría —en la fantástica ensoñación política de Lonardi— "ni vencedores ni vencidos". Así lo expresaría —tan errado como Urquiza— en el lema levantado en el momento inicial de la revolución.

Los hechos demostrarían la ceguera —en el mejor de los casos— de los planteos de los nacionalistas sin pueblo. Como lo previniera Scalabrini Ortiz, cualquier intento de desplazar a Perón sería rápidamente capitalizado por las fuerzas del imperialismo y la oligarquía, que barrerían de la escena a temblorosos demócratas de izquierda y arcaicos nacionalistas de derecha. También la intuición popular captaría —certera y velozmente— el sentido de la revolución "libertadora".

El tiempo apremiaba al cándido "libertador". Mientras se ultimaban detalles para los precipitados traslados a sus puestos de los oficiales que debían sublevar el interior, recién el 13 de setiembre pudo Lonardi reunirse con el capitán de navío Palma para sellar la unidad de acción entre las dos fuerzas. El general Uranga debía marchar sobre Rosario y el general Lagos actuaría en Cuyo. Para el Litoral se había pensado en León Bengoa, pero como estaba detenido —y su fuga alertaría— el coronel Señorans propuso convocar al general Aramburu, idea aprobada calurosamente por Lonardi. Aramburu —que había considerado inoportuno llevar adelante el golpe— aceptaría, y terminaría participando en posición subordinada a invitación de Lonardi.

El 14 de setiembre, Lonardi partió hacia Córdoba, donde ya lo aguardaba Osorio Arana. Hasta ese momento, el cuadro de situación —desde el punto de vista de las fuerzas comprometidas— era precario.

Las acciones se iniciaron en la madrugada del 16, con la toma de la Escuela de Artillería de Córdoba por las fuerzas de Lonardi, que luego —reforzadas— marcharon sobre la Escuela de Infantería. "Simultáneamente se alzaron Córdoba, Curuzú Cuatíá, Río Santiago y Puerto Belgrano, en tanto la Escuadra de Mar ponía proa al Río de la Plata. En la primera jornada, Lonardi logró dominar la ciudad de Córdoba tras dura lucha con la Escuela de Infantería, en tanto la infantería de Marina, procedente de Puerto Belgrano, ocupaba Bahía Blanca tras la rendición del Regimiento n° 5 de esa ciudad. En Curuzú Cuatíá, tras un primer predominio de los rebeldes, la subversión fracasó, dispersándose los revolucionarios. Río Santiago, al mando

del almirante Rojas, fue reprimido por Aeronáutica, debiendo los sublevados embarcarse en los buques de río hacia Pontón Recalada, a la espera de la flota de mar, en tanto el veterano submarino "Santiago del Estero" iniciaba el bloqueo de Buenos Aires"⁵⁶.

Apenas alertado el ministro de Guerra de la sublevación, dispuso rápidamente las operaciones destinadas a reprimirla. Se decretó el estado de sitio y Lucero ordenó al general Ferrazzano marchar sobre Río Santiago con efectivos de la 2ª División de Ejército con apoyo aéreo; al general Sosa Molina actuar sobre el foco rebelde de Córdoba, con tropas de la 4ª División de Ejército, convergiendo con las fuerzas comandadas por Iñiguez y con la 5ª División a las órdenes del general Moschini; el general Salinas debía someter a los sublevados en Curuzú Cuatíá y el general Molinuevo coordinaría las acciones sobre las bases de Puerto Belgrano y Comandante Espora.

Si bien Lonardi había podido concretar su primer objetivo —la Escuela de Infantería se rindió cuando los rebeldes creían perdida la partida— la situación no era auspiciosa en las primeras jornadas: las tropas que avanzaban sobre Córdoba eran superiores en número y potencia de fuego. Por lo demás, Aramburu había debido dispersar sus efectivos en el Litoral, y Río Santiago fue rendida rápidamente. Lagos había tenido, sin embargo, mejor suerte en Mendoza, pues allí se le plegaron las fuerzas de la Agrupación de Montaña Cuyo, que debían unirse a Sosa Molina para reprimir a los rebeldes de Córdoba.

En la Marina, el almirante Rojas —que fuera incorporado al movimiento por ser el único oficial de ese grado con el que podían contar los golpistas— tras abandonar Río Santiago precipitadamente, embarcó en el crucero "17 de Octubre" —luego "General Belgrano"— y asumió el comando en jefe de las fuerzas navales. La aviación naval se encargó de acosar a las tropas que —provenientes de Neuquén, Azul, Tandil y Mar del Plata— convergían sobre Bahía Blanca con gran superioridad bélica.

Aunque se percibían vacilaciones en las fuerzas que debían reprimir, el 18 de setiembre la suerte de los rebeldes parecía echada, pues Córdoba estaba cercada, y las tropas leales, al mando de Iñiguez y Morelos, se aprestaban a avanzar sobre la ciudad. Lonardi tenía la certeza de que no podría contener un nuevo ataque. Ese día, por la tarde, la escuadra de mar arribó a Pontón Recalada. Desde allí, Rojas lanzó un ultimátum al gobierno amenazando cañonear la ciudad de Buenos Aires y la destilería de petróleo de La Plata, si Perón

no renunciaba. El 19, el crucero "9 de Julio" bombardeó la destilería de Mar del Plata, demostrando que las amenazas no eran vanas. La revolución que venía —entre otras cosas— a "defender" el petróleo argentino, destruía las destilerías. ¡Extraña paradoja...! Luego, el rebautizado "Belgrano", apuntó sus cañones a Buenos Aires. Sin duda, Rojas no hubiera vacilado...

Sorpresivamente, y cuando estaba por expirar el plazo, se difundió la noticia de que Perón había entregado al Ejército su renuncia, lo cual fue recibido con no poco alivio por los rebeldes, que ya desesperaban de su situación. En realidad, no había una formal renuncia —que tendría que haber sido elevada al Congreso—, pero sí una nota del Presidente al Ejército, en la que Perón ofrecía su "retirada" en términos algo confusos: "El Ejército puede hacerse cargo de la situación, el orden y el gobierno, para construir la pacificación de los argentinos antes que sea demasiado tarde, empleando para ello la forma más adecuada y ecuánime. Creo que ello se impone para defender los intereses superiores de la Nación. Estoy persuadido que el pueblo y el Ejército aplastarían el levantamiento, pero el precio será demasiado cruento, perjudicial para sus intereses permanentes... Si mi espíritu de luchador me impulsa a la pelea, mi patriotismo y mi honradez ciudadana me inclinan a todo renunciamiento personal en holocausto a la Patria y al pueblo... Ante la amenaza de bombardeo a los bienes inestimables de la Nación y sus poblaciones inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer intereses o pasiones..."⁵⁷ —decía entre otras cosas.

Acto seguido, el general Lucero daba un comunicado informando que una junta de generales mediaría entre el Presidente y los comandos rebeldes, y convocando a éstos a cesar las hostilidades e iniciar tratativas de "entendimiento y pacificación". Desde Córdoba, Lonardi respondería exigiendo la renuncia de Perón como condición ineludible. El mismo día 19, Rojas ponía a disposición de Lonardi su nave insignia, a fin de iniciar conversaciones, a lo que el primero respondería invitando al jefe naval a enviarle un delegado. Se trataba del primer contacto entre ambos. En realidad, Lonardi distaba de creer segura la victoria, y suponía que todo consistía en una maniobra dilatoria del gobierno.

Los rebeldes no habían triunfado militarmente, y resultaba muy difícil que lo hicieran: aun el día 20, al trasladarse el general Lagos desde Cuyo a Córdoba, escucharía de labios del jefe de la revolución: "Como usted ha visto, sólo poseo el terreno que piso. Mañana se reanudará el ataque a Córdoba y tengo muy pocas posibilidades de éxito, pero estoy resuelto a luchar hasta

morir... Cuando me hayan deshecho a mí y yo haya muerto, usted debe constituir gobierno en Mendoza y luchar hasta morir también..."⁵⁸. Como se puede apreciar, Lonardi no era optimista...

En esas circunstancias, ¿qué había impulsado a Perón a adoptar esa actitud? Es posible que —como lo supusieron los rebeldes— buscaba ganar tiempo para organizar más fuerzas. Sin embargo, Perón aseguraría después, que los militares que lo rodeaban —Lucero, Sosa Molina— no eran confiables, y que su defección impidió accionar con decisión sobre los sublevados⁵⁹. También afirmaría que su nota no era una renuncia, y que fue interpretada como tal por los generales que integraban la junta, quienes prácticamente lo obligaron a renunciar⁶⁰. Sin embargo, se diría que hay algo más profundo tras la decisión —o más bien tras la indecisión— de Perón. Por un lado, es preciso considerar la fatiga del hombre que ha conducido a través de una década, un proceso político arduo y difícil; que está solo y siente que todos los enconos se concentran en él. Pero además, el agotamiento parece exceder el aspecto personal para alcanzar al régimen, trabado por la parálisis desde tiempo atrás. "Sofocar el golpe implica enfrentar la disyuntiva: empantanarse de nuevo estabilizándolo todo hasta que surja otro alzamiento o llevar el proceso adelante hasta sus últimas consecuencias..."⁶¹. La revolución no ha terminado —como lo dijera el Presidente algún tiempo atrás— sino que debe seguir adelante. Perón siente que su ciclo ha concluido y ya no tiene fuerzas para continuar. Por eso, en el mismo momento en que Lonardi —sitiado por las fuerzas de Iñiguez y Morelos— se cree perdido, se refugiará en la embajada paraguaya, bajando el telón sobre el último episodio del drama.

El mismo 20 de setiembre, Lonardi —que considera acéfalo el gobierno— se declara presidente provisional y establece Capital en Córdoba. Simultáneamente, envía un nuevo ultimátum a la junta, exigiendo una definición sobre la renuncia de Perón. La junta ha estado reunida entre el 10 y el 20, considerando la nota del Presidente, y discutiendo si debe interpretarse como renuncia. En la noche del 19, Perón ha aclarado a los generales que sólo se trata de un elemento para negociar, y "el Presidente constitucional seguiría siendo él hasta tanto el Congreso le aceptara la renuncia en el caso de presentarla, si las tratativas lo exigían"⁶². Pero el ultimátum obra decisivamente: el 20 a las 11.10 horas, la junta hace pública su aceptación de la renuncia del Presidente, y envía delegados a reunirse con Rojas en el crucero "17 de Octubre", para aceptar las condi-

ciones impuestas por los golpistas. El 23 de setiembre, Lonardi jura como presidente provisional. La "libertadora" ha triunfado.

NOTAS

- ¹ Ramos, Jorge Abelardo, "Revolución y Contrarrevolución en la Argentina: La Era del Bonapartismo", Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1972, pág. 227.
- ² Carri, Roberto, "Sindicatos y Poder en la Argentina", Sudestada, Bs. As., 1967, pág. 52.
- ³ *Ibid.*, pág. 52.
- ⁴ Senén González, Santiago, "Breve Historia del Sindicalismo Argentino", Alzamora Editores, Bs. As., 1974, pág. 81.
- ⁵ Discurso de Perón a los legisladores en Confalonieri, Orestes, "Perón contra Perón", Ed. Antyguá, Bs. As., 1956, pág. 229.
- ⁶ Versión taquigráfica de la clase dictada por Silenzi de Stagni en Confalonieri, Orestes, *op. cit.*, pág. 232.
- ⁷ Discurso de Frondizi, Arturo, reproducido en Confalonieri, Orestes, *op. cit.*, pág. 244.
- ⁸ Silenzi de Stagni, Adolfo, citado por Hernández Arregui, Juan José, "La Formación de la Conciencia Nacional", Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1973, pág. 431.
- ⁹ Jauretche, Arturo, en "Azul y Blanco", Bs. As., 26/6/67, pág. 20.
- ¹⁰ *Ibid.*, pág. 19.
- ¹¹ "Primera Plana", n° 318, Bs. As., 28/1/69, pág. 21.
- ¹² Testimonio de Luis Alberto Murray, manifestado al autor en entrevista personal.
- ¹³ Confalonieri, Orestes, *op. cit.*, pág. 343.
- ¹⁴ Godio, Julio, "La Caída de Perón: de Junio a Setiembre de 1955", Granica Editor, Bs. As., 1973, pág. 52.
- ¹⁵ Rouquié, Alain, "Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina 1943-1973", Emecé, Bs. As., 1983, págs. 106-107.
- ¹⁶ Confalonieri, Orestes, *op. cit.*, pág. 348.
- ¹⁷ Versión proporcionada al autor por Fermín Chávez, en entrevista personal.
- ¹⁸ "Primera Plana", n° 316, Bs. As., 14/1/69, pág. 41.
- ¹⁹ Así lo expresa Lucero, Franklin, "El Precio de la Lealtad", Ed. Propulsión, Bs. As., 1959, pág. 81.
- ²⁰ Potash, Robert, "El Ejército y la Política en la Argentina 1945-1962", Ed. Sudamericana, Bs. As., 1982, pág. 254.

- ²¹ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 36.
- ²² Ver detalles en Lucero, Franklin, *op. cit.*, págs. 81-82.
- ²³ Scenna, Miguel Angel, "Los Militares", Ed. De Belgrano, Bs. As., 1979, pág. 240.
- ²⁴ Ver las instrucciones impartidas en Lucero, Franklin, *op. cit.*, pág. 85.
- ²⁵ Rouquié, Alain, *op. cit.*, pág. 109.
- ²⁶ "Primera Plana", n° 317, Bs. As., 21/1/69, pág. 20.
- ²⁷ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 38.
- ²⁸ *Ibid.*, págs. 39-40.
- ²⁹ Galasso, Norberto, "Vida de Scalabrini Ortíz", Ediciones del Mar Dulce, Bs. As., 1970, pág. 476.
- ³⁰ "Primera Plana", n° 316, Bs. As., 14/1/69, pág. 44.
- ³¹ Galasso, Norberto, *op. cit.*, pág. 478.
- ³² "Primera Plana", n° 317, Bs. As., 21/1/69, pág. 21.
- ³³ *Ibid.*, pág. 22.
- ³⁴ *Ibid.*, pág. 22.
- ³⁵ Potash, Robert, *op. cit.*, págs. 264-265.
- ³⁶ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 101.
- ³⁷ "Primera Plana", n° 318, Bs. As., 28/1/69, pág. 21.
- ³⁸ *Ibid.*, pág. 21.
- ³⁹ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 108.
- ⁴⁰ "Primera Plana", n° 318, Bs. As., 28/1/69, pág. 21.
- ⁴¹ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 143.
- ⁴² *Ibid.*, pág. 137.
- ⁴³ *Ibid.*, pág. 141.
- ⁴⁴ *Ibid.*, pág. 144.
- ⁴⁵ *Ibid.*, pág. 147.
- ⁴⁶ Jauretche, Arturo, "El Popular", n° 7, Bs. As., 27/10/60, pág. 12.
- ⁴⁷ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 153.
- ⁴⁸ *Ibid.*, págs. 154-155.
- ⁴⁹ *Ibid.*, págs. 155-156.
- ⁵⁰ "Primera Plana", n° 318, Bs. As., 28/1/69, pág. 22.
- ⁵¹ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 183.
- ⁵² Lonardi, Marta, "Mi Padre y la Revolución del 55", Cuenca del Plata, Bs. As., 1980, pág. 57.
- ⁵³ Lucero, Franklin, *op. cit.*, pág. 126.
- ⁵⁴ Perón, Juan Domingo, "La Fuerza es el Derecho de las Bestias", Ed. Cicerón, Montevideo, 1958, pág. 79.
- ⁵⁵ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 165.
- ⁵⁶ Scenna, Miguel Angel, *op. cit.*, pág. 244.
- ⁵⁷ Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 207.
- ⁵⁸ Lonardi, Marta, *op. cit.*, págs. 127-128.
- ⁵⁹ Carta de Perón a Cooke reproducida en Godio, Julio, *op. cit.*, pág. 165.
- ⁶⁰ Perón, Juan Domingo, *op. cit.*, págs. 9-10.
- ⁶¹ Galasso, Norberto, *op. cit.*, pág. 478.
- ⁶² Lonardi, Marta, *op. cit.*, pág. 130.

VII

VENCEDORES Y VENCIDOS: EL SENTIDO DE LA "LIBERTADORA"

Mientras la oligarquía celebra alborozada en los salones de sus mansiones, y se brinda con champán en los directorios de empresas, en la Sociedad Rural y en la Bolsa de Comercio, la pequeña burguesía corre emocionada a la Plaza de Mayo para festejar, agitando banderitas, un triunfo ajeno...

Ha caído el "tirano", toda la prensa "seria" y la ciudadanía "sana" saludan el advenimiento de los "libertadores". Las "fuerzas vivas" y los partidos políticos —de izquierda a derecha, y con pocas excepciones— se aferran con fervor al mesiánico brazo armado, que como un poderoso "Deus ex máquina", viene a eliminar de la escena al protagonista de la pesadilla, que en realidad, es el pueblo... Porque la Libertadora no se hará —como lo pretende el inocente Lonardi— contra un hombre, ni siquiera contra los aspectos corruptos de un régimen. Se hará para borrar lo que el peronismo ha significado en cuanto irrupción popular en la vida política. En cuanto intento de economía nacional y justicia social.

Por eso, un silencio pesado y amargo se extiende sobre las barriadas obreras, sobre los confines más míseros y olvidados del país. Peones y proletarios, sirvientas y hacheros, saben que ahora estarán, otra vez, indefensos.

Ernesto Sábato —ferviente antiperonista por entonces, pero dotado de sensibilidad social— percibiría en una sola escena el sentido profundo del fenómeno peronista y —por oposición— de la revolución "libertadora":

En el Salto

“Aquella noche de setiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que escindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora. Pues, ¿qué más nítida caracterización del drama de nuestra Patria que aquella doble escena ejemplar? Muchos millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes, para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizados en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta”¹.

¡Ni vencedores ni vencidos...! ¡Vaya si los habría...! El equipo de nacionalistas católicos de Lonardi, que se creía dueño de la situación, comprobaría pronto que “...entre la revolución nacional de Perón y la contrarrevolución oligárquica no había lugar para una fórmula intermedia”².

Lonardi prometería garantías a la CGT —asegurando que se respetarían los sindicatos y las conquistas obreras— e invocaría la “unidad nacional”. No habría persecuciones ni revanchismos... Prontamente, los gremios serían asaltados por los comandos civiles y los sindicalistas “democráticos” —ante la pasividad policial—, y la Comisión Nacional de Investigaciones presidida por el sinuoso almirante Rojas —el mismo que tiempo atrás homenajeara a Perón y Evita³— detiene personas, allana domicilios, comete torturas y vejámenes⁴. Lonardi será impotente para oponerse, y se dedicará —en cambio— a limpiar de peronistas —o sospechosos de tales— las Fuerzas Armadas: 44 generales y cientos de oficiales de grados diversos son pasados a retiro. Al mismo tiempo, otros son reincorporados o ascendidos por haber “luchado contra el régimen”.

El 13 de noviembre, un golpe “intestinal” aparta de la escena al cándido general y sus nacionalistas clericales. Pedro Eugenio Aramburu —el mismo que interviniera “invitando” en la revolución— será promovido a la presidencia por los sectores más antinacionales y prooligárquicos del Ejército y la Marina.

De allí en más, la Marina liderará la reacción que agredirá al movimiento obrero y a los intereses nacionales. Aramburu y Rojas formularán la equívoca línea histórica “Mayo-Caseros” y consumarán la revancha oligárquica. La CGT será intervenida e inhabilitados 150.000 delegados y sindicalistas. El penal de Ushuaia —cerrado por Perón— abrirá sus puertas para recibir

a ex legisladores y funcionarios peronistas. Habrá bandadas y comandos paramilitares e “investigadores” con poderes extralegales para detener y torturar. Comenzará una sistemática campaña difamatoria —como la que décadas atrás las mismas fuerzas desencadenaron contra Yrigoyen— que escandalizará a la opinión pública con las supuestas depredaciones y delitos endilgados a Perón. Sus objetos personales, ropas y joyas —como los de Eva— son exhibidos públicamente para demostrar la fastuosidad de sus hábitos y la “insinceridad” de la justicia social que proclamaban (como si eso fuera capaz de invalidarla...).

En lo económico, el Plan Prebisch consumará el “retorno al coloniaje”. Mediante una deliberada distorsión de los indicadores reales, se fabricará una crisis. Se dirá —¡como siempre...!— que el país está al borde de la ruina y la cesación de pagos. Arturo Jauretche⁵ y Antonio Cafiero⁶ demostrarán más tarde con abundancia de cifras oficiales, y en forma incontestable, la interesada deformación de los datos de la balanza de pagos, para inventar una situación crítica que no existía. El mismo Prebisch, tiempo atrás, reconocería con honestidad intelectual el desacierto de su diagnóstico y de sus recetas liberales⁷, que producirían una regresión sin antecedentes en la economía argentina.

En realidad, el plan antinacional del doctor Prebisch ya había sido aceptado por Lonardi, que lo hizo suyo calurosamente. Luego, lo aplicarían los liberales, de la mano de Rojas y Aramburu —con los que “el país estaba seguro...”—. ¡Tal el “nacionalismo” de los “nacionalistas”...! “La desnacionalización del Banco Central, la devaluación de la moneda, la liquidación del IAPI (‘entidad perversa y perniciosa’, dirá el ingenio Lonardi), la declinación de la cartera crediticia del Banco Industrial, indican las grandes líneas del proceso. En octubre, al devaluarse el peso se opera el primer gran traslado de ingresos al sector agropecuario desde hacía una década. Se unifican los cambios a 18 pesos por dólar y el campo se baña de una dulce lluvia de oro... El país daba a su orientación económica una ‘vuelta de campana’ y se inclinaba a su estructura tradicional, agropecuaria y exportadora. Al desaparecer el régimen nacionalista de Perón, las clases antiguas ocupaban su lugar. Así definíase económicamente, el contenido de la revolución libertadora”⁸.

Desde la “Junta Consultiva”, todos los partidos políticos “democráticos” —radicales, socialistas, conservadores, democristianos, demócratas progresistas— prestaban su anuencia al despojo y a los atropellos de la dictadura oligárquica.

En marzo del 56, un decreto de ribetes kafkianos procuraría borrar los últimos diez años de vida política, prohibiendo todo lo que pudiera —lejanamente— relacionarse con el peronismo: ¡hasta las iniciales de Perón...!°. Curioso —y vano— intento de “blanquear” la memoria colectiva...

En junio de 1956, estallaría una rebelión de oficiales peronistas, encabezada por los generales Valle y Tanco. La “libertadora” teñiría sus manos de sangre, al fusilar impiadosamente y sin proceso a los participantes en la sublevación. El general Aramburu —sobrio demócrata— firmaría impertérrito las sentencias de muerte. Al mismo tiempo, en José León Suárez, numerosos trabajadores peronistas eran masacrados a tiros por orden del jefe de policía de la Provincia de Buenos Aires. Cuando los sordos ecos de los disparos resonaron en los patios de la prisión y —amparados por las sombras— en el basural de José León Suárez, los “libertadores” inauguraban en el país una etapa de violencia trágica, que se prolongaría en el tiempo.

Casi todo el espectro político argentino aprobaría en silencio —y aún aplaudiría entusiasta— a los fusiladores: “Se acabó la leche de la clemencia...” —diría Américo Ghioldi... El frente liberal-oligárquico estaba reconstituido. Una vez más, todas las fuerzas de la Argentina “decente” estaban de acuerdo: alta jerarquía eclesiástica, empresarios, partidos “democráticos”, los grandes diarios y la Sociedad Rural. Las fuerzas armadas ponían orden —a balazos cuando era preciso— y la pequeña burguesía —emocionada y agradecida— acudía presurosa a compartir las “migajas del banquete”... La Argentina se hundía en las tinieblas de una larga noche...

NOTAS

¹ Sábato, Ernesto, citado en “Polémicas de Jauretche”. Introducción y comentarios de Norberto Galasso, Los Nacionales Editores, Bs. As. 1981, págs. 158-159.

² Ramos, Jorge Abelardo, “Revolución y Contrarrevolución en la Argentina: La Era del Bonapartismo”, Plus Ultra, Bs. As. 1972, pág. 232.

³ Ver detalles en “Que al Salir Salga Cortando”, Introducción y comentarios de Norberto Galasso, Los Nacionales Editores, Bs. As. 1982, págs. 36 a 38.

⁴ Lonardi, Marta, “Mi Padre y la Revolución del 55”, Cuenca del Plata, Bs. As. 1980, pág. 205.

⁵ Jauretche, Arturo, “El retorno al colonaje”, Ed. del Mar Dulce, Bs. As. 1969, págs. 35 a 43.

⁶ Cafiero, Antonio, “Cinco Años Después”, Bs. As. 1961, págs. 95 a 123.

⁷ “Que al Salir Salga Cortando”, Introducción y comentarios de Norberto Galasso, Los Nacionales Editores, Bs. As. 1982, pág. 144.

⁸ Ramos, Jorge Abelardo, op. cit., pág. 239.

⁹ Maceyra, Horacio, “Las presidencias peronistas: Cámpora, Perón, Isabel”, Centro Editor de América Latina, Bs. As. 1983, págs. 11-12.